**C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.**

Los suscritos Diputados Martín Flores Castañeda, José Antonio Orozco Sandoval, Oscar Valdovinos Anguiano, Ignacia Molina Villarreal, José Verduzco Moreno, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, y los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a su consideración, la presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que adiciona una fracción IX Bis al inciso A) del artículo 25, y un artículo 52 Bis correspondiente a un nuevo capítulo VII Bis denominado trabajo obligatorio para la reparación del daño, ambos del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo establece en lo conducente que, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

En atención a lo anterior, uno de los ejes que se consideran fundamentales dentro del sistema penitenciario con el objetivo de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad procurando que no vuelva a delinquir y observando los beneficios que para él prevé la ley, es precisamente mediante el trabajo del propio sentenciado, ya que consideramos al trabajo como la actividad humana que contribuye al desarrollo de actitudes y aptitudes positivas en el individuo, además de mantenerlo ocupado, combatiéndose así el vicio que genera el ocio como causa de muchos vicios incluso de conductas antisociales.

Es preciso señalar que el artículo 5º de nuestra Carta Magna establece en su párrafo tercero que: “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”.

En función de lo anterior, nos queda claro que la Constitución Federal establece como única excepción por la que se podrá imponer el trabajo con el carácter de

obligatorio, cuando dicha obligación es consecuencia de una pena impuesta por la autoridad judicial, por ello es que con la presente iniciativa se propone incluir dentro del catalogo de penas que la autoridad judicial puede imponer, el trabajo obligatorio con el objetivo de que con su producto se resarza la reparación del daño a favor de las víctimas del delito.

En otro orden de ideas, el artículo 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los derechos de la víctima o del ofendido; la reparación del daño, estando el Ministerio Público obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

En razón del precepto constitucional acabado de transcribir el juzgador no podrá absolver al sentenciado de la reparación del daño si ha emitido una sentencia condenatoria, por ello el espíritu del dispositivo en estudio es que siempre que se emita una sentencia condenatoria se deberá condenar a la reparación del daño y se deberá procurar garantizar tal derecho a favor de la víctima por todos los medios legales posibles.

En ese sentido, uno de los medios legales que se propone para hacer efectivo y garantizar el derecho de la víctima a la reparación del daño, es precisamente a través del trabajo obligatorio del sentenciado que resultó declarado responsable, ello porque en muchas ocasiones sucede que el sentenciado carece de bienes que garanticen esa reparación del daño, así mismo no siempre está en posibilidades de otorgar una garantía económica para garantizar entre otros conceptos la reparación del daño, y en estos supuestos quién sale perjudicado es la víctima del delito al no quedar efectivamente tutelado a su favor en la legislación secundaria su derecho constitucional a que se le repare el daño cuando acredite en juicio que sufrió una afectación a sus bienes o derechos jurídicos a causa de una acción delictiva.

Por tales motivos es que al establecerse el trabajo obligatorio para la reparación del daño como una pena que puede ser impuesta por la autoridad judicial, se estará contribuyendo al respeto efectivo del orden constitucional, ya que haciendo una interpretación armónica, coherente y natural de los artículos 5º párrafo tercero, 18 párrafo segundo y 20 apartado C fracción IV todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión que válidamente se puede establecer como pena para ser impuesta por la autoridad judicial el trabajo obligatorio, con objeto de garantizar la reparación del daño a favor del sujeto pasivo del delito.

Además de lo anterior, se propone también establecer el trabajo obligatorio para la reparación del daño como sustitutivo de la pena de prisión, en aquellos delitos en que la condena no exceda de cuatro años de prisión, y siempre que el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial, en la forma y términos establecidos por esta, garantizando que por ningún

motivo el trabajo se desarrolle en forma que resulte denigrante o humillante para el condenado.

Con lo anterior, se estará fomentando entre quienes resulten condenados por un delito por lo regular de bajo impacto social, pues se exige que la condena no exceda de cuatro años de prisión, que bajo esa condición apuntada puedan acceder al beneficio de la sustitución de la pena de prisión por el trabajo, con objeto de cubrir la reparación del daño, con lo que saldrá ganando la víctima porque verá garantizada la reparación del daño a su favor, el sentenciado porque accedió a un beneficio sustitutivo de la pena de prisión, y el propio Estado porque con ello está aplicando una política de despresurización penitenciaria tan necesaria en la actualidad.

Por último, vale la pena precisar que en el desarrollo del trabajo para la reparación del daño que sea impuesto como pena en términos de lo establecido por el artículo 123 fracciones I y II de la Constitución Federal, la duración máxima de la jornada de trabajo deberá ser de ocho horas, la jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas, quedando terminantemente prohibido el trabajo en labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche de los menores de dieciséis años.

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona una fracción IX Bis al inciso A) del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue:

ARTÍCULO 25.-

A)

De la I a la IX

IX Bis.- Trabajo obligatorio para la reparación del daño;

De la X a la XI

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 52 Bis correspondiente a un nuevo capítulo VII Bis denominado Trabajo Obligatorio para la Reparación del Daño, al Código Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue:

CAPITULO VII BIS TRABAJO OBLIGATORIO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

ARTÍCULO 52 Bis.- El trabajo obligatorio como pena tiene por objeto la reparación del daño a la víctima u ofendido, y se impondrá invariablemente como sanción por cualquier delito en que se emita sentencia condenatoria, siempre que

no se hubiere garantizado la reparación del daño en cualquier otra forma autorizada por ley.

El trabajo obligatorio para la reparación del daño podrá imponerse como sanción sustitutiva a la pena de prisión en aquellos delitos en que la referida pena impuesta en la sentencia no exceda de cuatro años, y siempre que el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial, en la forma y términos establecidos por esta, garantizando que por ningún motivo el trabajo se desarrolle en forma que resulte denigrante o humillante para el condenado, y respetando las bases contenidas en el artículo 123 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se exceptúa de la aplicación de esta pena cuando se acredite mediante certificado médico que el trabajo representa un riesgo para la salud o la vida del sentenciado, o cuando este padezca una incapacidad tal que le impida prestar sus servicios, así como cuarenta y dos días anteriores y posteriores para la mujer después del parto, o tratándose de sentenciados de más de 65 años de edad, o cualquier otra circunstancia justificada que haga materialmente imposible la prestación del trabajo.

T R A N S I T O R I O:

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.